

A FONDO

# Inmigración y política


**Belén Romana**

 Miembro del Consejo Editorial  
de Expansión y Actualidad Económica

**No es fácil escribir** sobre inmigración. Cuando se trata de debates públicos sobre esta cuestión, las posturas suelen oscilar entre la corrección política extrema, según la cual la inmigración es un fenómeno que sólo aporta ventajas al país receptor, y la percepción unidimensional de la inmigración como un problema de seguridad. Esta dificultad es un elemento adicional que constriñe la capacidad de analizar un asunto en un país en el que el intento de debatir aplicando un mínimo de análisis suele naufragar en el mar de la contienda política (o, mejor dicho, partidaria).

No obstante, aun a sabiendas de estas dificultades, no podemos renunciar a analizar las múltiples dimensiones de la inmigración, un fenómeno que ha cambiado sustancialmente la fisonomía de nuestro país.

Cualquier observador admitirá que España es hoy un país muy distinto del que conocíamos apenas diez años atrás. Un país distinto al menos por dos grandes razones. En primer lugar, porque el notable ritmo de crecimiento económico ha permitido una mayor convergencia real con nuestros socios europeos más ricos. En segundo lugar, porque los intensos flujos inmigratorios han situado en al menos cuatro millones de personas la cifra de población extranjera residente en nuestro país. Esto, además de dar al traste con todas las proyecciones demográficas (y hacer necesarias revisiones periódicas de todas nuestras cifras macroeconómicas), ha significado un gran cambio social por la diversidad de orígenes y realidades culturales de los inmigrantes.

Ambos fenómenos están sin duda conectados. El crecimiento de nuestra economía (y su capacidad de creación de puestos de trabajo) es un potente factor de atracción para quienes buscan una vida mejor fuera de su país. A su vez, la inmigración ha permitido alargar la vida de nuestro modelo de crecimiento. El número y la movilidad de los trabajadores extranjeros, en su mayoría adultos jóvenes, han dinamizado el mercado de trabajo: se ha creado empleo a un ritmo vertiginoso y han aumentado las tasas de actividad y ocupación. Asimismo, el aumento del número de cotizantes ha sido un alivio –eso sí, transitorio– para los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones.

## Proyecciones para el futuro

¿Qué cabe esperar para el futuro? Las proyecciones de los principales organismos internacionales indican que los flujos migratorios continuarán en los próximos años en el marco de la globalización. En tales circunstancias, es necesario adoptar políticas que permitan aprovechar las oportunidades inherentes a esos movimientos de población. Este desafío es especialmente significativo para nuestro país, ya que la progresiva pérdida de competitividad de la economía española puede terminar con su pujanza actual. Un riesgo éste al que, además, la población inmigrante se encuentra particularmente expuesta, dado que gran parte de la misma está em-

pleada en sectores muy cíclicos, como la construcción o determinados servicios. Además, la política de inmigración en España tampoco puede ser ajena al cambio de modelo necesario para relanzar nuestra competitividad. De hecho, ha de ser un elemento más que contribuya a asentar la capacidad de nuestra economía de generar prosperidad y bienestar para todos, nacionales e inmigrantes.

## Inmigración y capital humano

Así, la política de inmigración (como elemento ya sustancial de la política económica) debe girar alrededor de tres ejes: apertura, control e integración. La apertura permite reconocer no sólo el derecho de las personas a emigrar, sino también el hecho de que España necesita de los emigrantes para seguir creciendo y hacer frente a los exigentes retos que surgen de la creciente competencia en mercados cada vez más globales.

No obstante, una apertura sin control sería dañina, tanto para nuestro país como para los propios inmigrantes. Hasta el momento, nuestra política inmigratoria no ha sido capaz de combinar con acierto estos dos elementos, como pone de manifiesto la persistencia de la inmigración irregular. Por tanto, han de establecerse sistemas que hagan de la inmigración un proceso ordenado, ajustado a las posibilidades –inevitablemente limitadas– y a las necesidades de nuestra economía. Es crucial desarrollar mecanismos de entrada ordenada de inmigrantes de menor cualificación (por ejemplo, a través de mecanismos administrativos más ágiles para la contratación en origen). Pero además ha de prestarse una especial atención a un segmento muy específico de la inmigración: las personas con elevada formación. Es éste un aspecto muy poco desarrollado hasta ahora, cuestión especialmente preocupante en un país que ya no puede seguir compitiendo a base de salarios reducidos y que ha de enfrentarse a un mercado mundial (el de personas de alta cualificación) muy competitivo.

En efecto, no es raro escuchar el desánimo en el que fácilmente puede caer cualquier empresario que intente captar inmigrantes con una elevada formación. Y, sin embargo, éstos son una valiosísima fuente de capital humano, como se pone de manifiesto en otros países.

Por tanto, no pueden escatimarse los esfuerzos para facilitar la entrada de personas de gran capital humano a nuestro mercado de trabajo y, también, a nuestras universidades. Es sin duda una vía para ir cambiando nuestro modelo productivo y situarnos en segmentos más avanzados de la cadena de valor.

Un último apunte. Nada de lo anterior sostenría una buena política inmigratoria en ausencia del tercero de los ejes: la integración. De ella depende la capacidad futura (y casi presente) de convivencia en nuestro país, para la que todos debemos colaborar. De la misma forma que ocurre en otros campos, el debate público debería soltar parte de su lastre político e incluir reflexiones más económicas. Sin duda, queda mucho por hacer.